

# Crónica del mes

## Marzo

Como era anticipable, *marzo* fue, en mayor medida que los anteriores, un mes profundamente sobredeterminado por los dinamismos de la coyuntura electoral. La prolongación de la discusión en torno a la propuesta político-electoral del FMLN, aun cuando ésta fuera de hecho finalmente rechazada, contribuyó no poco a ello.

La contrapropuesta que el presidente Duarte formuló a finales de febrero había relanzado la discusión sobre la iniciativa insurgente, pero suponía el consenso de los diferentes órganos del Estado, para empezar el del ejecutivo y de la asamblea legislativa. El 1 de marzo, a efecto de negociar algunos acuerdos mínimos sobre el contenido de la contrapropuesta, la directiva legislativa se reunió con el mandatario en Casa Presidencial. Tras la reunión, la cual se prolongó por cinco horas, el presidente Duarte declaró que habían acordado "formar un comité gubernamental con los dos órganos del Estado en la búsqueda de la paz," en el sentido de tener conversaciones con el FMLN. Por su lado, el presidente de la asamblea, Lic. Ricardo Alvarenga Valdivieso, señaló que dicho Organó tenía la disposición a encontrarle una salida política al conflicto, pero "enmarcada dentro de la constitucionalidad."

La contrapropuesta de Duarte pasó entonces a capitalizar la discusión, opacando momentáneamente el planteamiento de la propia propuesta del FMLN. El 3 de marzo, el candidato presidencial del MAC, Lic. Julio Adolfo Rey Prendes, opinó que el mandatario estaba "mal asesorado" y que su contrapropuesta "es, además de inconstitucional, muy grave y peligrosa ya que nos colocaría en una situación peor que la que estamos viviendo." En cambio, el candidato presidencial del PDC, Dr. Fidel Chávez Mena, reiteró su respaldo a la contrapropuesta, al tiempo que acusó a ARENA y a la directiva legislativa de estar "dilatando, bloqueando y obstaculizando el nombramiento de las personas que formarán la comisión gubernamental."

Pese a la intensidad de la polémica, o quizá precisamente por ello, la discusión sobre la posposición de las elecciones permanecía estancada. En un esfuerzo por superar el *impasse*, los dirigentes de la Convergencia Democrática, Guillermo Ungo y Rubén Zamora, propusieron el 3 de marzo que las conversaciones entre el gobierno, los partidos y el FMLN se realizaran en México entre el 7 y 9 de marzo; instaron a los partidos a retirar sus candidaturas antes del 10 de marzo y sugirieron que las

elecciones se aplazaran por lo menos hasta el 9 de julio, para que el FMLN dispusiera de un tiempo mínimo para preparar su campaña electoral. A su vez, a través de Radio Venceremos, el FMLN propuso que el encuentro se realizara a más tardar entre el 7 y 8 de marzo en San Salvador. Al propio tiempo, la emisora subrayó que "las elecciones del 19 de marzo son concebidas para sostener la guerra contra el pueblo," por lo cual "pedimos a nuestro pueblo no votar el 19 de marzo."

El 6 de marzo, la directiva de la asamblea acordó conformar la comisión legislativa que se integraría a la delegación gubernamental para las pláticas con el FMLN. El estado de ánimo prevalente en los directivos de dicho Organó, empero, no mostraba demasiada disposición a negociar con el FMLN la posposición de los comicios. El mismo día en que se acordó la integración de la comisión legislativa, el Lic. Alvarenga Valdivieso enfatizó que las elecciones no podían aplazarse: "Tal como el FMLN no acepta el 19 de marzo por las razones que fuesen, nosotros no aceptamos ningún cambio de fecha, porque constitucionalmente ésta no puede ser cambiada."

El pesimismo empezó a cundir en la izquierda. El 7 de marzo, el Dr. Ungo expresó su opinión de que tanto la propuesta del FMLN como la de la Convergencia Democrática estaban ya virtualmente descartadas, dada la proximidad de los comicios y las maniobras dilatorias con las cuales ARENA y el PDC estaban enfrentando las alternativas de posposición de los comicios.

El 8 de marzo, a la vista de la incapacidad de los partidos para lograr el consenso, y de la negligencia de la asamblea para nombrar a sus delegados ante la comisión gubernamental que dialogaría con el FMLN, la comandancia general guerrillera emitió un comunicado anunciando su decisión de no continuar las negociaciones antes del 19 de marzo y llamando a sus bases a "repudiar las fraudulentas elecciones para la guerra" mediante la abstención o la anulación del voto. Según el comunicado, "el FMLN mantiene su oferta de paz y seguirá luchando por ella, pero considera que realizar una reunión con el gobierno cuando faltan

pocos días para unas elecciones diseñadas para continuar y profundizar la guerra, sería prestarnos al engaño de nuestro pueblo y de la opinión mundial. Sólo después de esas elecciones para la guerra, que además serán fraudulentas, podrá volverse a intentar la negociación de la paz entre el FMLN, el gobierno, la asamblea legislativa y los partidos."

Pese a ello, los órganos ejecutivo y legislativo se reunieron el 9 de marzo para discutir la contrapropuesta del presidente Duarte. Como resultado de dicha reunión, la comisión gubernamental acordó proponer al FMLN un encuentro antes del 19 de marzo para negociar con la insurgencia el cese de la lucha armada y su incorporación al proceso. La comisión sugería reunirse en Guatemala o Costa Rica. A su vez, el FMLN respondió con un nuevo comunicado, emitido ese mismo día, reabriéndose a la posibilidad de reunirse antes del 19 de marzo si previamente la comisión gubernamental establecía "de manera clara y pública" su disposición a adoptar acuerdos sobre los puntos contenidos en la propuesta insurgente original y en la propuesta ampliada presentada en Oaxtepec, y a posponer las elecciones por cinco meses a partir de la concertación del cese de hostilidades. "Si no existe ese acuerdo — concluía el comunicado — no tiene ningún sentido celebrar la reunión antes del 19 de marzo, puesto que con ella tanto el PDC como ARENA sólo buscan ponerla en función de su disputa electorera para unas elecciones que no tienen ningún papel en favor de la paz, sino únicamente para darle a la continuación de la guerra un falso argumento de legitimidad." Adicionalmente, en la noche del mismo día, el FMLN anunció a través de Radio Venceremos su primer paro nacional al transporte en el año, el cual se iniciaría a las cero horas del 15 de marzo. Como presupuesto justificativo del paro, el FMLN aducía que "existe en el pueblo un sentimiento de repudio a las elecciones del 19 de marzo, que el FMLN está en la obligación de acompañar."

A diferencia del FMLN, en cambio, la Convergencia Democrática llamó al pueblo a votar,

animada del supuesto de que ningún partido ganaría en la primera ronda, de modo que, en la segunda, si la Convergencia lograba obtener suficiente apoyo electoral, podría estar en capacidad de reactivar la iniciativa de "paz ya." La propaganda de la Convergencia sostenía que, aunque las elecciones obviamente no resolverían los problemas fundamentales del país, el voto a favor de la fórmula Ungo-Roldán podía constituir "un paso importante para replantear la cuestión de la paz en la segunda vuelta...el voto nulo y la abstención son votos perdidos pues no cuentan y favorecen a ARENA y al PDC."

Paradójicamente, al anunciar su campaña de boicot electoral, el FMLN reiteró por otra parte su respaldo a la plataforma de la Convergencia y reconoció que la participación de ésta "en las elecciones en desventaja y contra el fraude tiene el objetivo de abonar el camino de la paz justa negociada." En el terreno concreto de la praxis, empero, el FMLN se mantuvo en la decisión de boicotear el evento electoral, por más que el propio Ungo solicitó a la comandancia general suspender el paro al menos el día de las votaciones. Algunas organizaciones laborales cercanas a la UNTS, como el Movimiento Pan, Tierra, Trabajo y Libertad (MPTL) apoyaron sin ambages la estrategia electoral del FMLN. Así, en declaraciones ofrecidas el 13 de marzo, la dirigencia del MPTL, denunció que la participación de la Convergencia Democrática en las elecciones del 19 de marzo "sólo avala la represión que se desarrolla contra el movimiento popular y se presta al juego electoral de los norteamericanos." El mismo día, en una línea complementaria de críticas, el consejo ejecutivo de la UNTS denunció la preparación de un fraude electoral a favor de Chávez Mena. La UNTS aseguraba tener noticias de "informes confidenciales" sobre una reunión entre funcionarios de la embajada norteamericana, el PDC, el gobierno y cuatro altos jefes militares "para preparar el fraude." Según la UNTS, entre los componentes del fraude se incluía la campaña propagandística que pretendía presentar a Chávez Mena como virtual ganador de las elecciones, y el anuncio formulado

por el Ministro de Defensa sobre la consignación al juzgado primero de primera instancia de San Vicente del mayor Mauricio Beltrán Granados, así como de un subteniente, tres clases y cuatro soldados implicados en la masacre de San Sebastián.

Mientras tanto, la campaña, en franca picada cívica, alcanzaba el nivel rastrero de las campañas electorales anteriores. A tal punto fue así que el 6 de marzo el CCE hubo de ordenar a los partidos ARENA y PDC suspender todos los contenidos de su propaganda que violaran los artículos 170 y 171 del Código Electoral, al tiempo que deploró que "se están externando insultos y difamaciones entre los candidatos de los diversos partidos políticos, situación que resulta nociva a la moral y buenas costumbres del electorado y por demás violatoria de la ley de la materia." Por lo demás, los preparativos logísticos y administrativos del evento prosiguieron su marcha, dando por descontado que los comicios se realizarían en la fecha programada originalmente. El CCE informó que estaban acreditados para votar 1,834,000 ciudadanos, y se aprestó a distribuir 6,300 urnas, conteniendo cada una 300 papeletas. Tomando en cuenta que, en teoría, cada junta estaría integrada por cinco miembros, el total de ciudadanos que integraría las mesas receptoras ascendería a unos 31,500. Adicionalmente, el CCE estimaba que los partidos destacarían a unos 50 mil vigilantes.

El 13 de marzo, el presidente del CCE, Ing. Ricardo Perdomo, informó que la Fuerza Armada se había comprometido a ejecutar un plan de seguridad para los locales y dependencias del CCE. Aun así, el Consejo estimaba que, debido a las condiciones de violencia imperantes en algunas zonas del país, las votaciones no se podrían efectuar en unos 19 municipios. Según el jefe del Estado Mayor, coronel René Emilio Ponce, esos municipios serían 21: nueve en Chalatenango, dos en San Miguel, dos en Cabañas y ocho en Morazán. En la ciudad de San Salvador, el CCE dispuso la instalación de siete centros de votación, ubicados en la Alameda Roosevelt, el parque Bolívar, la plaza Libertad, el parque Centenario, el

paseo Independencia y las instalaciones del INFRAMEN y del Instituto Técnico Industrial.

La disposición de tales centros de votación estuvo precedida de una violenta disputa entre ARENA y el PDC. ARENA aducía que la Fuerza Armada había recomendado "lugares cerrados para mayor seguridad." El 16 de marzo, su candidato a la vicepresidencia, Sr. Francisco Merino, denunció que el PDC pretendía concentrar en pequeñas áreas "gran cantidad de urnas" para sembrar el caos y forzar a una segunda ronda electoral. Según Merino, "la alta concentración de ciudadanos genera desórdenes, lo que puede perjudicar la votación e incluso dar lugar a que termine y tenga que anularse. La maniobra es clara: buscan reducir los niveles de votación para que ARENA no amplíe el margen y forzarnos a un resultado que lleve a la segunda vuelta."

A su vez, el presidente del CCE, Ing. Ricardo Perdomo, respondió que "el ejército tiene la capacidad para darle esa seguridad a dichos centros en todo el país;" mientras que los dirigentes democristianos, Dr. José Antonio Morales Erhlich y Sr. Roberto Viera, denunciaron que "ARENA quiere los puestos de votación en las colonias San Benito y Escalón, donde ellos son los dueños de todas las casas inmediatas; en cambio, el ciudadano común y corriente con más confianza va a la plaza Libertad o al centro de la ciudad... lo más justo es que los centros se pongan cerca de donde vive la mayoría." En relación a las acusaciones de ARENA sobre el caos que presuntamente pretendía sembrar el PDC, Morales Erhlich y Viera aseguraron que "ARENA tiene grupos de choque, que van a hacer desórdenes, porque lo hemos averiguado. También es probable que algunos comandos urbanos quieran molestar en la periferia de la ciudad." En el mismo contexto, el PDC denunció presiones de ARENA sobre el consejal del PCN, Ing. Juan José Bonilla, para que éste favoreciera la supresión de tres centros de votación en la capital; en represalia por la negativa de Bonilla a las presiones, la bancada arenera en la asamblea habría procedido a la destitución del presidente de la Corte de Cuentas, Lic. Ciro Cruz

Zepeda (PCN).

El paro al transporte, que en un principio el FMLN había anunciado para iniciarse a partir del 15 de marzo, comenzó el 16. El día anterior, fue asesinado a balazos el Dr. Francisco Peccorini Letona, miembro del Comité Pro Rescate de la Universidad de El Salvador, cuando conducía su automóvil sobre la avenida Olímpica. El 16 de marzo, a través de una cinta magnetofónica enviada a Radio Sonora, presuntos comandos urbanos amenazaron con "ajusticiar" a los integrantes de las mesas receptoras de votos y advirtieron que "las personas que salgan a votar, a sabiendas de que nuestras unidades atacarán los centros de votación, lo harán bajo su responsabilidad." El 17, durante el segundo día del paro, la prensa reportó el ametrallamiento de una ambulancia de la Cruz Roja a la altura de Soyapango, así como el lanzamiento de una bomba incendiaria a un microbús de pasajeros. Este tipo de acciones alcanzó tal nivel que el día 18, a través de la Radio Farabundo Martí, la Comandancia General del FMLN se vio obligada a aclarar que tales amenazas obedecían a una "campaña de desinformación" orquestada por el régimen, al tiempo que negó categóricamente acciones como la del ametrallamiento de la ambulancia o la bomba incendiaria contra el microbús. La comandancia denunció los "comunicados apócrifos redactados con un evidente tono terrorista, haciendo una burda exaltación de la violencia, con amenazas a la prensa, términos que son ajenos a los contenidos en los documentos en los cuales definimos nuestra posición oficial." Asimismo, el FMLN recordó que "los únicos comunicados están firmados por nuestra Comandancia General y transmitidos a través de nuestras emisoras."

Como quiera que sea, las amenazas proferidas por el Frente Oriental "Francisco Sánchez" provocaron la renuncia de algunas juntas electorales municipales y juntas receptoras de votos en el oriente del país. El propio arzobispo de San Salvador, Monseñor Arturo Rivera Damas, lamentó que, aun cuando había solicitado al FMLN

la suspensión del paro o por lo menos su acortamiento o suavizamiento, no había logrado más que el compromiso de la comandancia de respetar a los votantes, a los miembros de las juntas electorales y los lugares de votación.

El 13 de marzo, en un nuevo mensaje a la nación, el presidente Duarte formuló un llamado a la ONU, la OEA y organismos internacionales de derechos humanos así como a los gobiernos de España, México y Venezuela y de los países centroamericanos, para que intercedieran ante el FMLN y lo hicieran desistir de su estrategia de boicot a las elecciones. Asimismo, el mandatario solicitaba a Juan Pablo II que "con su humilde, pero convincente palabra, persuada a la dirigencia del FMLN a fin de que renuncie a la violencia y permita a los salvadoreños ser artesanos de la paz." Por su parte, las gremiales empresariales redoblaron sus exhortaciones a la ciudadanía en orden a ejercer el sufragio. En un comunicado emitido el 13 de marzo, la Cámara de Comercio e Industria sostenía que los comicios del 19 de marzo encerraban una "extraordinaria significación para el futuro de El Salvador" y subrayaba que "el abstencionismo y la emisión de votos deliberadamente nulificados, en momentos tan difíciles como los que actualmente confrontamos, constituyen una negación a la buena voluntad de los hombres que luchan por construir un destino digno y promisorio para nuestra patria." Según la cámara, el 19 de marzo ofrecía "la oportunidad a todos los salvadoreños que amamos a nuestra patria, para demostrar ante los pueblos del mundo nuestra fe profunda en la verdadera democracia, y nuestro absoluto rechazo a las ideologías esclavizantes de la libertad humana que propugnan por alcanzar el poder por la vía sangrienta de las armas, sin importarles el exterminio de seres humanos y la destrucción de bienes que constituyen parte del patrimonio de la nación." En el mismo marco ideológico, el Fiscal General de la República, Dr. Roberto García Alvarado, envió a los medios de prensa un comunicado en el cual les demandaba abstenerse de divulgar mensajes "en los que se incite al pueblo a no ejercer el sufragio" y excitaba a toda la ciudadanía a "votar masivamente" para

demostrar "su rechazo total al terrorismo y a las violaciones de los derechos humanos, provenientes de grupos que pretenden negar su derecho a vivir en paz, con justicia y libertad."

En una posición intermedia entre los llamados al abstencionismo y las exhortaciones a votar, el Nuncio Apostólico en El Salvador, Monseñor Francesco de Nittis, informó que el Papa había recibido el llamamiento lanzado por el presidente Duarte el día 13, y aseguró que el pontífice "formula fervientes votos a fin de que estas elecciones puedan desarrollarse libremente, en el pleno respeto del ejercicio del derecho del voto de todos los salvadoreños, así como en el uso del derecho de expresar sus propias opciones en un ambiente de civil entendimiento y concordia nacional."

Indolente a tales exhortaciones, el FMLN se mantuvo en su decisión de boicotear las elecciones. El 17 de marzo, la comandante Ana Guadalupe Martínez declaró en México que el FMLN no pretendía impedir los comicios, sino mostrar las condiciones de guerra imperantes en El Salvador, y aseguró que la ofensiva militar guerrillera desarrollada durante la coyuntura tenía como objetivo primordial replantear la necesidad de una solución política al conflicto. En este marco, subrayó que el paro al transporte sólo perseguía disuadir a los votantes, ya que una exigua participación de electores resaltaría el fracaso de las elecciones reforzando la necesidad del diálogo. Por lo demás, consideró "correcto" el llamamiento a votar formulado por la Convergencia Democrática, dada la necesidad de ésta de contar con un número respetable de votos para consolidar su posición dentro del sistema político.

En relación a los posibles escenarios políticos derivados de las elecciones, Ana Guadalupe Martínez reiteró la tesis del FMLN en el sentido de que habría diferencias importantes entre un gobierno de ARENA y una reelección del PDC. Según su opinión, un triunfo de Chávez Mena representaría una "prolongación innecesaria" de la guerra, mientras que si la victoria correspondía a Cristiani

habría más posibilidades de negociación, ya que ARENA "está preocupada de que El Salvador es un país ingobernable" y además estaría consciente de que no tendría el respaldo de Estados Unidos ni de la comunidad internacional "ante una posible política de genocidio."

Sobre este transfondo de argumentos, el FMLN procedió a materializar sus advertencias en el sentido de hacer de la coyuntura electoral un infierno si su propuesta no era aceptada por el gobierno y los partidos. El país entero se vio envuelto por una atmósfera de creciente tensión militar, la cual fue escenario de un sensible incremento de las acciones armadas, en grado muy superior al nivel de actividad bélica que caracterizó a las elecciones legislativas y municipales de marzo de 1988. El FMLN profundizó y extendió sus acciones de desgaste, concretamente ataques y emboscadas; y de sabotaje, de manera especial las dirigidas contra la red nacional de distribución eléctrica y el transporte, paralizando prácticamente a todo el país.

Durante los cuatro días de su duración, el boicot logró paralizar en un 95 por ciento el transporte colectivo y comercial en todo el país; la circulación de los medios alternativos de transporte y de vehículos particulares disminuyó y la mayoría de estaciones gasolineras no brindaron sus servicios pese a la protección de la Fuerza Armada, lo cual se agudizó por la falta de energía eléctrica debido a los sabotajes al tendido nacional. Al concluir el paro, a las 6:00 am del 20 de marzo, arrojaba un saldo de por lo menos siete vehículos y dos gasolineras saboteados. Más tarde, el día 27, fue incendiado en la capital un autobús más por haber circulado durante el paro.

Por su parte, la Fuerza Armada inició con un día de anticipación su ya conocido Plan Caminante, implementando operativos de patrullaje en las principales carreteras y ciudades del país; y anunció un incremento de las medidas de seguridad en las zonas urbanas, especialmente en San Salvador. Los jefes castrenses informaron que más de 3 mil agentes de los cuerpos de seguridad, apoyados por batallones élite, estarían a cargo de

la seguridad de los comicios en la capital; en el marco del desarrollo de cuatro operaciones dirigidas a garantizarlos. De acuerdo a las fuentes, éstas serían el propio Plan Caminante, para contrarrestar el boicot al transporte; Plan Democracia, para dar seguridad a todo lo concerniente al CCE; Plan PAL, para prestar protección a las gasolineras; y Plan PMI, para dar seguridad a los observadores extranjeros.

Aparejado al boicot al transporte, las fuerzas rebeldes desarrollaron una intensa campaña contra el sistema nacional de energía eléctrica, que puede ser considerada la más fuerte que se ha realizado en lo que va de la guerra. Ya para el 10 de marzo, el sistema de distribución de energía estaba funcionando con un déficit del 30 por ciento, al encontrarse fuera de servicio al menos seis líneas de transmisión primaria y tres de subtransmisión. El día 14, el déficit subió al 50 por ciento. Un día después, con el dinamitado de torres y postes en las áreas de San Martín, Nejapa y San Antonio Abad, en San Salvador; San Rafael Cedros, Cuscatlán; Mercedes Umaña, en Usulután; y cantón San Felipe, en San Vicente; que dejaron al menos nueve líneas primarias fuera de servicio, CEL informó que se estaba trabajando con apenas un 30 por ciento de la capacidad total. Para el 16 de marzo, dada la virulencia del sabotaje contra el sistema eléctrico, el déficit en la producción y distribución de energía ascendió al 90 por ciento, al quedar fuera de servicio no menos de 15 líneas primarias de distribución, situación que se mantuvo prácticamente inalterable hasta el día 22.

Como consecuencia del profundo déficit energético, fue considerablemente afectado el sistema de distribución de agua potable. Para el día 17, en la zona metropolitana de San Salvador, sólo un 25 por ciento se encontraba recibiendo el servicio y de forma irregular. A esto se agregó la escasez de gas propano al paralizarse la producción del mismo, la escasez de combustible y alimentos y, además, la falta de transporte. Por su lado, la CEL puso en marcha un rígido plan de racionamiento de la energía que se agudizó aún más al fundirse por

sobrecargo una planta de emergencia en Soyapango, al oriente de la capital, y tener que ser desconectadas otras en San Miguel, por la misma razón. Muchas zonas del territorio nacional quedaron desprovistas totalmente del servicio y en la ciudad capital el abastecimiento llegó a cubrir en algunos momentos, y de forma racionada, sólo las áreas de hospitales y las plantas de bombeo de ANDA. El 29 de marzo, en un balance general del mes, CEL informó que la red nacional de producción y distribución de energía sufrió un total de 142 sabotajes, resultando destruidas un total de 81 torres de líneas primarias, 40 de subtransmisión, 31 postes y 15 transformadores, con un saldo de pérdidas que ascendían a los 6.5 millones de colones. Durante el mismo período, el FMLN habría ejecutado otras operaciones menores de sabotaje contra la cooperativa Entre Ríos, de Zacatecoluca, el 16 de marzo; contra el beneficio San Emilio, en Jucuapa, Usulután el día 18, y contra una fábrica textilera localizada en el cantón Plan del Pito, en Mejicanos, San Salvador, el 25.

Al igual que el sabotaje, las operaciones estrictamente militares experimentaron un sensible incremento tanto en el campo como en la ciudad. De acuerdo a fuentes castrenses, el día 15, fuerzas guerrilleras operativizaron ataques contra el Destacamento Militar No. 1 y puestos de avanzada en la periferia de Chalatenango y Nueva Concepción. Como saldo de los combates resultaron 9 rebeldes y 5 soldados muertos y 6 soldados más heridos. Otro rebelde murió en combate contra efectivos del Batallón Belloso, en Nejapa, al norte de San Salvador. Un día más tarde, el 16, se registraron fuertes ataques contra posiciones del Destacamento Militar de Ingenieros de la Fuerza Armada en la periferia de Zacatecoluca, en La Paz; contra otras seis posiciones del ejército en la zona comprendida entre Cinquera y Tejutepique, en Cabañas, y contra tropas de la Quinta Brigada de Infantería en Santa Clara, en San Vicente.

Entre el 18 y 19 de marzo, las fuerzas insurgentes desarrollaron considerables ataques contra posiciones militares en las poblaciones de Chinameca, en San Miguel; Santa Elena y San

Francisco Javier, en Usulután; y San Miguel de Mercedes y Tejutla, en Chalatenango. Otros fuertes combates se registraron en las jurisdicciones de Corinto, Cacaopera, San Isidro, Delicias de Concepción, en Morazán; Carolina, San Luis de la Reina y San Antonio El Mosco, en San Miguel; Anamorós, en La Unión; e Ilobasco, en Cabañas. Finalmente, entre el 27 y 28 de marzo, se reportaron fuertes enfrentamientos en las poblaciones de Textistepeque, en Santa Ana; San Francisco Morazán y Concepción Batres, en Chalatenango; y Villa Victoria, en el departamento de Cabañas.

La capital también experimentó con regular fuerza la operatividad de las unidades rebeldes. El día 14 fue emboscada una patrulla de la Policía Nacional al sur-oeste de la capital, resultando un agente muerto. Dos días después, comandos urbanos atacaron con disparos de lanzacohetes una posición de la Guardia Nacional y las instalaciones del CITFA en el sur de San Salvador, destruyendo un dormitorio de la tropa. El 19 de marzo, día de las votaciones, se registraron fuertes y prolongados combates en el norponiente de la capital, cuando comandos urbanos atacaron posiciones de la Fuerza Armada en San Ramón, resultando un cabo muerto y varios soldados heridos. Finalmente, el día 22, unidades rebeldes atacaron con disparos de lanzacohetes LOW las instalaciones del Centro de Inteligencia de la Fuerza Armada y de la Policía Nacional de Monserrat. Se reportó además un hostigamiento contra el Centro Penal La Esperanza, de Mariona.

En este mismo marco de violencia, aunque en una línea distinta de responsabilidades, la prensa destacó la muerte de tres periodistas que cubrían el desarrollo de la coyuntura electoral, los días 18 y 19 de marzo. El primer caso se dio la noche del 18, cuando los fotógrafos de la agencia Reuters, Roberto Navas y Luis Galdámez, ambos salvadoreños, transitaban a bordo de una motocicleta sobre el boulevard del ejército y fueron interceptados por un retén de la Fuerza Aérea, el cual, tras pedirles sus papeles de identificación y permitirles continuar la marcha, disparó sobre ellos, hiriendo a Galdámez y asesinando a Navas. El segundo caso

se produjo el 19, cuando personal del Canal 12 viajaba a La Unión para cubrir el desarrollo de las votaciones, y un retén del batallón Arce abrió fuego contra el vehículo en que se conducían, a la altura del kilómetro 142, hiriendo mortalmente al sonidista de dicho canal, Mauricio Pineda. El tercer caso fue el del periodista holandés, Cornelio Lagrouw, quien fue herido en fuego cruzado al suscitarse un enfrentamiento entre el ejército y la guerrilla en la localidad de San Francisco Javier (Usulután). El vehículo a bordo del cual se le trasladaba a un centro asistencial fue blanco del fuego de un helicóptero de la Fuerza Aérea por más de veinte minutos, tiempo durante el cual el periodista falleció.

Pese a este clima de violencia, las elecciones de todas maneras tuvieron lugar en la fecha originalmente programada. Según las cifras oficiales ofrecidas por el CCE después de un escrutinio singularmente rápido —en relación a lo que ha sido la experiencia electoral salvadoreña— se habrían emitido poco más de un millón de votos, de los cuales unos 939 mil habrían sido válidos. La fórmula Cristiani-Merino se impuso en la primera vuelta con el 53.82 por ciento de los votos válidos. En segundo lugar, el PDC obtuvo el 36 por ciento de los votos válidos. Muy por detrás de los punteros, el CCE adjudicó el tercer lugar al PCN, con el 4.07 por ciento de los votos válidos, y el cuarto a la Convergencia Democrática, con el 3.8 por ciento, en medio de las protestas de ésta alegando fraude en su contra para evitar que tuviese un representante ante el CCE.

Bajo diversas formulaciones, la mayoría de las evaluaciones *post factum* coincidieron en que el boicot electoral habría contribuido considerablemente a decantar el resultado de los comicios en la primera vuelta. Tanto el PDC como la Convergencia Democrática estaban persuadidos de que el boicot les afectaría en mucho mayor medida que a ARENA, por la mayor capacidad de este partido para movilizar a sus simpatizantes. El Dr. Chávez Mena había advertido que la campaña del FMLN contra las elecciones sería más fuerte que la de 1982, y que con ella el FMLN pretendía afectar al

PDC y favorecer a ARENA para "facilitar la estrategia de la confrontación," agudizar las contradicciones y alcanzar el poder por la vía violenta. Análogamente, el presidente Duarte había acusado al FMLN de ayudar a ARENA y perjudicar a las tendencias moderadas al decretar el paro y advertido que una victoria arenera fortalecería a las extremas y conduciría a la desintegración a las opciones de centro. Según Duarte, "un triunfo de ARENA producirá una confrontación entre el gobierno y el pueblo y un aumento de la ayuda a los rebeldes, y puede ser tan fuerte que creará condiciones para una insurrección popular." En cambio, el Ministro de Defensa, general Carlos Vides Casanova, opinaba que, aunque el boicot reduciría el número de votantes, afectaría "por igual a todos los partidos políticos." De modo más lacónico, la embajada norteamericana admitía que "el FMLN puede hacer mucho" para afectar los resultados de la consulta electoral.

La Convergencia Democrática, más que ningún otro partido, sufrió en carne propia los efectos de *boomerang* del boicot electoral guerrillero. El 21 de marzo, Ungo declaró estar "satisfechos porque nos hemos convertido en la tercera fuerza y porque hemos logrado que las elecciones estén marcadas no sólo por la guerra sino también por el diálogo y la paz," si bien denunció las intimidaciones y amenazas de que fueron objeto los votantes de la Convergencia en diversas localidades y deploró los "recursos muy limitados" con los que contó la coalición para desarrollar su campaña. En el mismo marco de declaraciones, no ocultó su contrariedad por la implementación del boicot guerrillero a las elecciones, el cual habría contribuido "significativamente" a los magros resultados de la Convergencia. A este respecto, declaró sin ambages que "el FMLN se equivocó" e "hizo mucho daño" a la Convergencia al decretar el boicot; y criticó abiertamente al FMLN por ser "inconsistente con sus tácticas," perjudicar a los "partidos pobres" y "favorecer a ARENA con una victoria relativamente fuerte, al darle el triunfo en la primera vuelta." "El FMLN —puntualizó— cometió un error táctico al decretar el boicot al



tránsito rodado, porque con el incremento de sus actividades militares nuestro voto no logró vencer el terror que provocó la presencia abrumadora del ejército; el boicot al transporte y el miedo al ejército, que militarizó el país, impidió que votara mucha de nuestra gente." Según Ungo, el FMLN habría querido "mamar de tres tetas:" las abstenciones, los votos nulos y los votos a favor de la Convergencia, pero "esta táctica sólo podía conducir a una fuerte abstención que nadie puede atribuirse." Ungo recordó que, cuando los dirigentes de la Convergencia se reunieron el 6 de marzo en Managua, con los comandantes guerrilleros, éstos no les advirtieron que "fueran a desencadenar una ofensiva tan fuerte contra las elecciones." No obstante, aclaró que las diferencias de la Convergencia con el FMLN eran "tácticas y temporales," si bien en lo personal consideraba conveniente "dejar pasar un tiempo antes de conversar con los comandantes." Por otra parte, discrepó también del análisis del FMLN sobre las posibilidades de dialogar con ARENA. Ungo reconoció que el cambio de Presidencia "modifica el triángulo de poder salvadoreño" y que el próximo gobierno "tendrá más peso ante los militares y los norteamericanos del que tuvo el anterior," pero al propio tiempo estimó que "ARENA sigue siendo fascista y el partido de los ricos."

En sus primeras declaraciones tras el triunfo, Cristiani ha llamado a deponer toda actitud sectaria, olvidarse de los colores políticos y unir esfuerzos para sacar al país de la crisis. Ha prometido respetar los acuerdos de Esquipulas II y reanudar el diálogo con el FMLN para la incorporación de éste al proceso político.

Las expectativas generadas por estas promesas han sido dispares. El presidente Duarte, por ejemplo, ha advertido del peligro de que "vol-

vamos a caer en el pasado, en los escuadrones de la muerte, en los abusos de autoridad y otros casos que realmente pueden hacer mucho daño." El general Vides Casanova, en cambio, ha opinado que "será muy difícil para el nuevo gobierno dar retrocesos, ya que existen frenos significativos, como la posibilidad de que el gobierno norteamericano le suspenda la ayuda económica y militar a El Salvador; y la prensa, entre otros." Por su parte, la comandancia general del FMLN ha anunciado que pronto formulará una nueva propuesta de negociación "al gobierno de Duarte y a los señores Cristiani y Merino que someterá a prueba su discurso." Según ampliaciones ofrecidas el 21 de marzo en México por los miembros de la comisión político-diplomática del Frente, comandante Ana Guadalupe Martínez y Salvador Samayoa, la propuesta contendría elementos sobre el papel de la Fuerza Armada en la vida política y sobre el diseño del modelo económico que más convendría al país. Al propio tiempo, el FMLN ha advertido que "mientras no haya logros confiables (en el proceso de diálogo) seguiremos empleando con eficacia nuestras armas para derrotar a los desesperados guerrilleros." A la base del planteamiento guerrillero opera la apreciación de que ARENA ha logrado el primer lugar "con el mayor abstencionismo registrado durante los años de guerra," pues más del 60 por ciento de los ciudadanos en edad de votar no lo hicieron o bien anularon o dejaron en blanco las papeletas. Según el FMLN, los votos a favor de Cristiani sumarían "una minoría inferior a la quinta parte de los ciudadanos salvadoreños," lo cual implicaría que "ni moral ni políticamente puede considerarse legítima la elección de Alfredo Cristiani." Junto a otros factores, ello significaría también que Cristiani llegaría al Ejecutivo "en condiciones de mucha mayor debilidad y desventaja" que cuando el Ing. Duarte asumió la Presidencia.